

Una revolución vacía

Las promesas incumplidas de Hugo Chávez

Francisco Rodríguez



EL 2 DE DICIEMBRE, cuando los venezolanos dieron al presidente Hugo Chávez su primera derrota electoral en 9 años, la mayoría de los analistas se sorprendió. De acuerdo con los resultados oficiales, el 50.7% de los votantes rechazó la reforma constitucional propuesta por Chávez, la cual habría expandido el Poder Ejecutivo, habría eliminado los límites al período presidencial y habría allanado el camino para la construcción de una economía “socialista”. Fue un gran revés para un presidente que apenas un año antes había ganado un segundo período de 6 años con el 62.8% de los votos. Los analistas de los medios tuvieron dificultades para dar una explicación. Señalaron factores idiosincrásicos, como el nacimiento de un nuevo movimiento estudiantil y la desertión de grupos poderosos de la coalición de Chávez. Sin embargo, pocos llegaron tan lejos como para desafiar la sabiduría popular sobre cómo se las ha arreglado Chávez para mantenerse en el poder durante tanto tiempo.

Aunque las opiniones difieren sobre si el mandato de Chávez debería caracterizarse como autoritario o democrático, prácticamente todas parecen coincidir en que, en contraste con sus predecesores, Chávez ha hecho del bienestar de los pobres de Venezuela su prioridad. Su gobierno, piensan, ha proporcionado alimentos subsidiados a familias de bajos ingresos, ha redistribuido la tierra y la riqueza, y ha invertido dinero de la floreciente industria petrolera venezolana en programas de salud y educación. Entonces, no debería sorprender que, en un país cuya política estuvo dominada durante mucho tiempo por las élites adineradas, Chávez se haya ganado el apoyo duradero de las clases pobres de Venezuela.

FRANCISCO RODRÍGUEZ, profesor asistente de Economía y de Estudios Latinoamericanos de la Wesleyan University, fue Economista en Jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, de 2000 a 2004.



Este argumento puede resultar convincente para muchos que están indignados, con toda razón, por las profundas desigualdades sociales y económicas de América Latina. Pero, por desgracia, esta percepción es errónea. Ni las estadísticas oficiales ni los cálculos independientes arrojan evidencia alguna de que Chávez haya reorientado las prioridades estatales en beneficio de los pobres. La mayoría de los indicadores de desarrollo humano y de salud no han mostrado progreso significativo alguno, más allá de los considerados normales en medio de un auge petrolero. De hecho, algunos se han deteriorado de manera preocupante y los cálculos oficiales indican que la desigualdad en el ingreso ha aumentado. La hipótesis de que “Chávez es bueno para los pobres” es inconsistente con los hechos.

Mi escepticismo con respecto a esta noción comenzó durante mi ejercicio como Economista en Jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela. En septiembre de 2000, dejé la academia estadounidense para dirigir a un equipo de investigación con funciones muy similares a las de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos. Yo tenía muchas expectativas con respecto al gobierno de Chávez y estaba emocionado ante la posibilidad de trabajar en un gobierno que prometía concentrarse en el combate a la pobreza y a la desigualdad. Sin embargo, rápidamente descubrí la gran brecha que había entre la retórica del gobierno y la realidad de sus prioridades políticas.

Poco después de haber entrado a la Asamblea Nacional, tuve un enfrentamiento con el gobierno por la insuficiencia de recursos destinados al Fondo Único Social (FUS), que Chávez había creado para coordinar la distribución de fondos para programas de combate a la pobreza. La ley que estableció el FUS incluía una cláusula especial para garantizar que éste se beneficiaría del aumento en las ganancias del petróleo. Pero cuando las ganancias del petróleo comenzaron a crecer, el Ministro de Finanzas ignoró la cláusula y asignó al FUS sólo 295 millones de dólares en el presupuesto de 2001 —15% menos que el año anterior y menos de un tercio de los 1 100 millones que ordenaba la ley—. Cuando mi oficina señaló esta inconsistencia, al Ministerio de Finanzas se le ocurrió el creativo truco de contabilidad de reajustar la ley para que los programas que no coordinara el FUS parecieran, de cualquier manera, estar recibiendo recursos de éste. El efecto consistió en desviar recursos de los pobres, incluso cuando las ganancias del petróleo estaban aumentando de manera vertiginosa. (Los miembros de línea dura del gobierno, indignados por las críticas realizadas por la oficina a mi cargo, exigieron de inmediato mi salida. Cuando los últimos moderados que entendían la necesidad de contar con un equipo de investigación independiente para evaluar las políticas abandonaron el bando de Chávez, en 2004, el gobierno finalmente disolvió nuestra oficina).

El éxito político de Chávez no proviene de los logros de sus programas sociales ni de su eficacia para redistribuir la riqueza. Más bien, debido a una combinación de suerte y de manipulación del sistema político, Chávez se ha enfrentado a elecciones en momentos de fuerte crecimiento económico, actualmente impulsado por un

auge petrolero mayor que cualquiera que haya ocurrido desde la década de los setenta. Al igual que los votantes de cualquier otro lugar, los venezolanos tienden a votar con el bolsillo y, hasta hace poco, esto había significado votar por Chávez. Pero ahora, la mala gestión de la economía y el fracaso para estar a la altura de su retórica en pro de los pobres finalmente han empezado a alcanzarlo. Con la aceleración de la inflación, la creciente escasez de alimentos básicos y el fracaso crónico generalizado en la provisión de servicios públicos básicos, los venezolanos están empezando a vislumbrar las consecuencias de las políticas económicas de Chávez —y no les gusta lo que ven—.

IZQUIERDA FALSA

DESDE EL MOMENTO en que llegó a la presidencia, en 1999, Chávez presentó su política económica y social como una alternativa de izquierda al llamado Consenso de Washington y como un distanciamiento importante de las reformas de libre mercado de los gobiernos anteriores. Aunque, en realidad, las diferencias fueron moderadas al principio, el ritmo del cambio se aceleró de manera significativa después de la crisis política y económica de 2002-2003, cuando se vivió un intento de golpe de Estado fallido y una huelga nacional que duró 2 meses. Desde entonces, la economía venezolana ha sufrido una transformación.

En términos generales, este cambio puede caracterizarse por tener cuatro dimensiones básicas. En primer lugar, el tamaño del Estado ha aumentado en forma dramática. Los gastos del gobierno, que representaban sólo 18.8% del PIB en 1999, ahora equivalen al 29.4% del PIB, y el gobierno ha nacionalizado sectores clave como la electricidad y las telecomunicaciones. En segundo lugar, la forma de fijar precios y salarios se ha convertido en un proceso muy regulado por medio de una red de restricciones, en vigor desde 2002, que van desde controles rígidos a los precios y al tipo de cambio, hasta una prohibición para despedir trabajadores. En tercer lugar, ha habido un deterioro significativo en la seguridad de los derechos de propiedad a medida que el gobierno ha expropiado terrenos y empresas privadas de manera ad hoc, apelando tanto a motivos políticos como económicos. En cuarto lugar, el gobierno ha llevado a cabo una renovación completa de la política social, reemplazando los programas existentes con una serie de iniciativas vistosas, conocidas como “misiones”, dirigidas a atender problemas específicos, como el analfabetismo o los deficientes servicios de salud en barrios pobres.

Las opiniones difieren sobre qué tan deseables son las consecuencias de muchas de estas reformas; no obstante, parece haber surgido un amplio consenso en torno a la idea de que, por lo menos, las reformas han permitido una redistribución significativa de la riqueza del país entre su mayoría pobre. De hecho, la afirmación de que Chávez ha llevado beneficios tangibles a los pobres de Venezuela se ha convertido en un lugar común, incluso entre sus críticos. En una carta dirigida al presidente George W. Bush, en vísperas de las elecciones presidenciales de Venezuela en 2006, Jesse Jackson, Cornel West, Dolores Huerta y Tom Hayden escri-

bieron: “Desde 1999, los ciudadanos de Venezuela han votado reiteradamente por un gobierno que, a diferencia de otros en el pasado, compartiría la riqueza del petróleo de su país con millones de venezolanos pobres”. El ganador del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ha señalado: “El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, parece haber tenido éxito al llevar educación y servicios de salud a los barrios de Caracas que, en el pasado, se habían visto poco beneficiados por la rica dotación de petróleo de ese país”. Incluso *The Economist* ha escrito: “El estilo de revolución de Chávez ha conseguido algunos avances sociales”.

Uno esperaría que tal consenso estuviera respaldado por un número abrumador de pruebas. No obstante, hay pocas evidencias que apoyen la afirmación de que el gobierno de Chávez ha actuado de forma distinta a los gobiernos venezolanos anteriores —o, para el caso, de manera distinta a la de otros países en desarrollo de América Latina— en cuanto a la redistribución de las ganancias del crecimiento económico hacia los pobres. Se cita a menudo la estadística referente a la disminución de la pobreza de un punto máximo de 54%, en el punto culminante de la huelga nacional de 2003, a 27.5%, en la primera mitad de 2007. Aunque esta disminución puede parecer impresionante, también se sabe que la reducción de la pobreza se asocia, en gran medida, con el crecimiento económico, y que el PIB per cápita de Venezuela aumentó casi 50% durante el mismo período, sobre todo debido a que los precios del petróleo se triplicaron. La pregunta real no es, pues, si la pobreza ha disminuido, sino si el gobierno de Chávez ha sido particularmente eficaz para convertir este período de crecimiento económico en reducción de la pobreza. Una forma de evaluarlo es calculando la reducción en la pobreza por cada aumento de un punto porcentual en el ingreso per cápita —en la jerga de los economistas, la elasticidad del ingreso de la reducción de la pobreza—. Este cálculo muestra una reducción promedio de 1 punto porcentual en la pobreza, por cada punto porcentual de aumento del PIB per cápita durante esta recuperación: una proporción que se compara en forma desfavorable con la de muchos otros países en desarrollo, para los cuales los estudios tienden a fijar la cifra en, aproximadamente, 2 puntos porcentuales. Asimismo, uno esperaría que el crecimiento en favor de los pobres estuviera acompañado de una marcada disminución en la desigualdad del ingreso. Sin embargo, según el Banco Central de Venezuela, la desigualdad en realidad ha aumentado durante el gobierno de Chávez, con un incremento en el coeficiente de Gini (una medida de desigualdad económica, en la que el 1 indica desigualdad perfecta y el 0 indica igualdad perfecta) de 0.44 a 0.48 entre 2000 y 2005.

Las estadísticas sobre pobreza y desigualdad, por supuesto, sólo relatan una parte de la historia. Hay muchos aspectos del bienestar de los pobres que no han captado las medidas de ingreso monetario y es ahí donde, quienes apoyan a Chávez, afir-

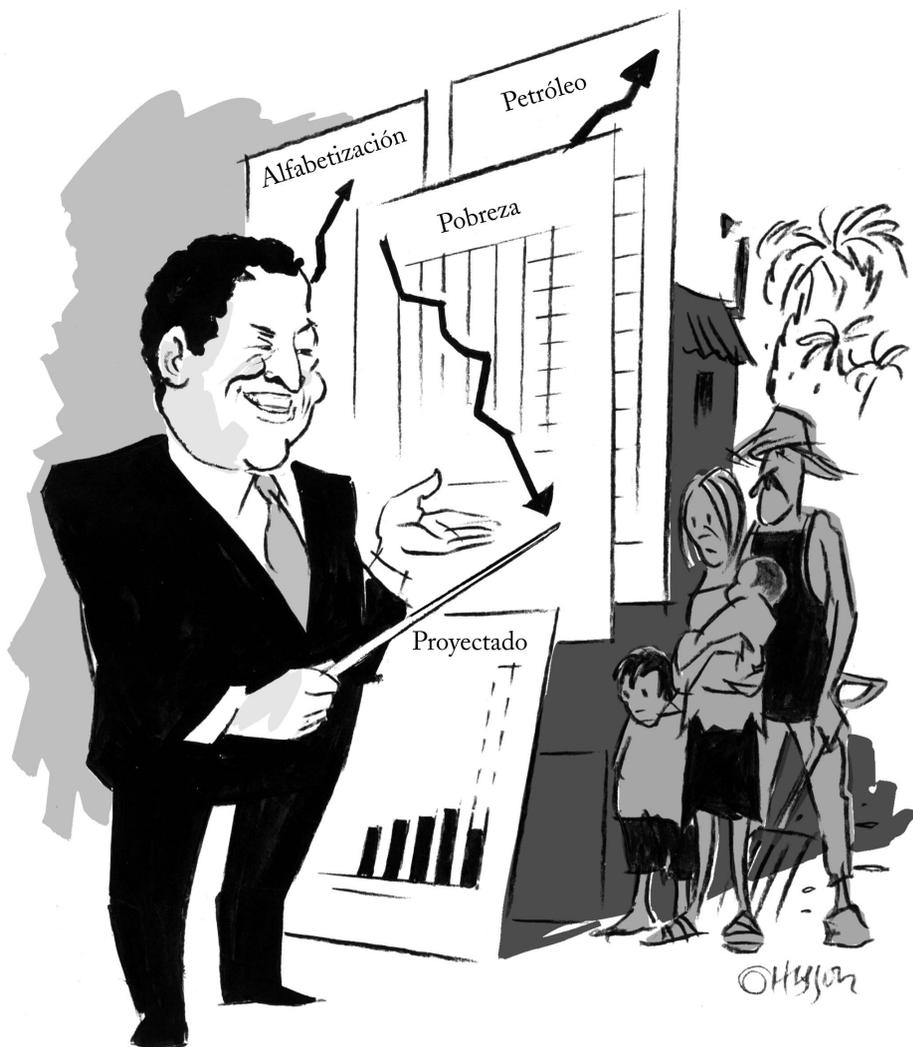
El modelo económico de Chávez ha comenzado a fracasar.

man que el gobierno ha tenido sus mayores logros en las actividades de sus “misiones”, que se han concentrado en la provisión directa de servicios de salud, educación y otros servicios públicos básicos a comunidades pobres. Pero, una vez más, las estadísticas oficiales no muestran señales de una mejoría sustancial en el bienestar del venezolano promedio, y en muchos casos ha habido un deterioro preocupante. El porcentaje de bebés con bajo peso, por ejemplo, aumentó de 8.4% a 9.1% entre 1999 y 2006. Durante el mismo período, el porcentaje de hogares sin acceso al agua corriente aumentó de 7.2% a 9.4%, y el porcentaje de familias que viven en casas con piso de tierra casi se triplicó, al pasar de 2.5% a 6.8%. En Venezuela, se pueden ver las “misiones” por todas partes: en los carteles del gobierno que tapizan las calles de Caracas, en las omnipresentes camisetas rojas que se entregan a quienes participan en los programas y que usan quienes apoyan al gobierno en los mítines de Chávez, y en las asignaciones excesivas del presupuesto gubernamental. El único lugar en donde es difícil encontrar a las “misiones” es en las estadísticas de desarrollo humano.

Resulta sorprendente que, dadas la retórica y la reputación de Chávez, las cifras oficiales no muestren cambio significativo alguno en la prioridad asignada al gasto social durante su gobierno. La porción promedio del presupuesto destinada a salud, educación y vivienda bajo el gobierno de Chávez en sus primeros 8 años de mandato fue de 25.12%, prácticamente idéntica a la porción promedio (25.08%) de los 8 años anteriores. Y hoy es más baja que en 1992, el último año de funciones del gobierno “neoliberal” de Carlos Andrés Pérez —el líder a quien Chávez, que en ese entonces era Teniente Coronel del Ejército venezolano, intentó derrocar mediante un golpe de Estado, supuestamente en beneficio de la mayoría pobre que había sido marginada—.

En varios estudios recientes, he trabajado con colegas para analizar de una manera más sistemática los resultados de las misiones de salud y educación de Chávez. Nuestros hallazgos confirman que, en realidad, Chávez ha hecho poco por los pobres. Por ejemplo, su gobierno a menudo afirma que la llegada de médicos cubanos como parte del programa de salud Barrio Adentro ha contribuido a disminuir la mortalidad infantil en Venezuela. De hecho, un análisis cuidadoso de las tendencias en la mortalidad infantil y neonatal muestra que la tasa de disminución no difiere significativamente de la del período previo a Chávez, ni de la tasa de disminución de otros países latinoamericanos. Desde 1999, la mortalidad infantil en Venezuela se ha reducido a una tasa anual de 3.4%, cifra prácticamente igual a la tasa de 3.3% a la cual había disminuido durante el período previo de 9 años, y que es inferior a las tasas de disminución para el mismo período en Argentina (5.5%), Chile (5.3%) y México (5.2%).

Aún más decepcionantes son los resultados del programa de alfabetización del gobierno, denominado Robinson. El 28 de octubre de 2005, Chávez declaró que Venezuela era un “territorio libre de analfabetismo”. Su campaña de alfabetización nacional, anunció, había enseñado a leer y a escribir a 1.5 millones de personas, y el Ministro de Educación declaró que el analfabetismo residual representaba a menos



de 0.1% de la población. El logro recibió un considerable reconocimiento internacional y muchos especialistas y observadores ocasionales lo tomaron en sentido literal. Por ejemplo, un artículo reciente publicado en el *San Francisco Chronicle* reportó que “el analfabetismo, que antes afectaba al 10% de la población, se ha eliminado por completo”. El Presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el Director General de la UNESCO, Koïchiro Matsuura, enviaron al gobierno venezolano cartas públicas de felicitación por dicho logro. (Luego de la declaración de Matsuura, el gobierno de Chávez afirmó que la erradicación del analfabetismo había sido “verificada por la UNESCO”).

Sin embargo, junto con Daniel Ortega de la escuela de negocios IESA de Venezuela, analicé las tendencias en las tasas de analfabetismo basadas en respuestas a las encuestas realizadas en hogares por el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. (Una presentación completa de nuestro estudio aparecerá en el número de octubre de 2008 de la revista *Economic Development and Cultural Change*). En

contraste con las afirmaciones del gobierno, encontramos que había más de 1 millón de venezolanos analfabetas para finales de 2005, una disminución mínima en relación con los 1.1 millones de personas analfabetas registradas en la primera mitad de 2003, antes del inicio del programa Robinson. Además, incluso esta pequeña reducción se debe a tendencias demográficas, más que al programa en sí. En una batería de pruebas estadísticas, encontramos escasas evidencias de que el programa hubiera tenido algún efecto estadísticamente distinguible sobre el analfabetismo de Venezuela. También encontramos numerosas inconsistencias en la versión del gobierno. Por ejemplo, éste afirma haber empleado a 210 410 capacitadores en el esfuerzo contra el analfabetismo (aproximadamente 2% de la mano de obra venezolana), pero no hay evidencia en la información sobre empleo en el sector público de que esas personas hayan sido contratadas ni constancia en las estadísticas del presupuesto gubernamental de que se les haya pagado alguna vez.

LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
DEL SR. CHÁVEZ

DE HECHO, aun cuando la creencia común se ha vuelto más fuerte fuera de Venezuela, la mayoría de los venezolanos, de acuerdo con encuestas de opinión, ha tenido conciencia, durante mucho tiempo, de que las políticas sociales de Chávez son inadecuadas e ineficaces. Seguramente, a los venezolanos les gustaría que los programas del gobierno —en particular, la venta de alimentos subsidiados— siguieran en vigor, pero eso es muy distinto a creer que han atendido de manera razonable el problema de pobreza en el país. Una encuesta realizada por la empresa venezolana Alfredo Keller y Asociados, en septiembre de 2007, mostró que sólo el 22% de los venezolanos piensa que la pobreza ha disminuido durante el mandato de Chávez, mientras que el 50% opina que se ha incrementado y el 27% considera que se ha mantenido igual.

Sin embargo, al mismo tiempo, los votantes venezolanos han dado crédito a Chávez por el importante crecimiento económico del país. En las encuestas, una mayoría aplastante ha expresado su apoyo a la manera como Chávez ha manejado la economía y ha señalado que su situación personal estaba mejorando. Por supuesto, esto no sorprende: con una economía apoyada en el aumento en las ganancias del petróleo, para 2006, Venezuela había disfrutado 3 años consecutivos de cifras de crecimiento de 2 dígitos.

No obstante, para finales de 2007, el modelo económico de Chávez había comenzado a fracasar. Por primera vez desde comienzos de 2004, la mayoría de los votantes afirmaba que tanto su situación personal como la del país habían empeorado durante el año anterior. La escasez de alimentos básicos, como leche, frijoles negros y sardinas, era crónica, y la diferencia entre la tasa de cambio oficial y la del mercado negro alcanzó el 215%. Cuando la Junta del Banco Central recibió el informe de precios de noviembre, que señalaba que la inflación mensual se había elevado a 4.4% (equiva-

lente a una tasa anual de 67.7%), decidió retrasar la publicación del informe hasta después de que tuviera lugar el referendo sobre la reforma constitucional.

Esta crisis económica que se agrava cada vez más es el resultado predecible del severo mal manejo de la economía que ha hecho el equipo económico de Chávez.

Durante los últimos 5 años, el gobierno de Venezuela ha buscado con determinación aplicar políticas económicas y fiscales expansionarias, incrementando el gasto real en 137% y la liquidez real en 218%. Este derroche ha excedido incluso la expansión en las ganancias del petróleo: el gobierno de Chávez ha logrado la hazaña admirable de tener un déficit presupuestario en medio de un auge petrolero.

Tales políticas expansionarias fueron apropiadas durante la profunda recesión con la que se enfrentó Venezuela después de la crisis política y económica de 2002-2003. Pero, al continuar la expansión una vez terminada la recesión, el gobierno generó una crisis inflacionaria. El problema se ha visto complicado, por un lado, por los esfuerzos para atender los desequilibrios resultantes con una red cada vez más compleja de controles de precios y del tipo de cambio, y, por otro, por las constantes amenazas de expropiación dirigidas a los productores y dueños de negocios, como una advertencia para que no aumenten los precios. No sorprende que la respuesta haya sido una abrupta caída en la producción de alimentos y una creciente escasez de comida.

Una solución sensata a la sobreexpansión de Venezuela requeriría controlar el gasto y el crecimiento de la oferta monetaria. Sin embargo, dicha solución es un anatema para Chávez, quien en repetidas ocasiones ha equiparado cualquier llamado a la reducción del gasto con el dogma neoliberal. En cambio, el gobierno ha intentado lidiar con la inflación, aumentando la oferta de moneda extranjera dirigida a las empresas nacionales y a los consumidores, e incrementando los subsidios del gobierno. Como resultado, se tiene una economía muy distorsionada, en la que el gobierno subsidia, efectivamente, dos tercios del costo de las importaciones y viajes al extranjero para los ricos, mientras que los pobres no pueden encontrar alimentos básicos en los anaqueles de las tiendas. El asombroso crecimiento de las importaciones, que casi se han triplicado desde 2002 (incluso, las importaciones de artículos tan lujosos como Hummers y whisky escocés de 15 años de añejamiento han aumentado en forma aún más dramática), ahora amenaza con borrar el excedente de la cuenta corriente del país.

Lo más triste es que todo esto era predecible. De hecho, la “chavezconomía” de ninguna manera surgió de la noche a la mañana, sin precedente alguno: a grandes rasgos esta historia es la misma que siguen las desastrosas experiencias de muchos países latinoamericanos durante los años setenta y los ochenta. Los economistas

Los votantes están
empezando a darse
cuenta de que Chávez
no ha estado a la altura
de sus promesas.

Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards han calificado a esas políticas como “la macroeconomía del populismo”. Con base en las experiencias económicas de gobiernos tan diversos políticamente como el de Juan Perón, en Argentina, de Salvador Allende, en Chile, y de Alan García, en Perú, estos especialistas encontraron fuertes similitudes en sus políticas económicas y en la evolución económica resultante. La macroeconomía populista se caracteriza, invariablemente, por aplicar políticas fiscales y económicas expansionarias y por mantener una moneda sobrevaluada con la intención de acelerar el crecimiento y la redistribución. En general, esas políticas se ponen en marcha en el marco de una desatención a las restricciones fiscales y al tipo de cambio extranjero, y las acompañan los intentos por controlar las presiones inflacionarias, manteniendo los precios y el tipo de cambio. Los economistas latinoamericanos ya conocen bien el resultado: el surgimiento de cuellos de botella en la producción, la acumulación de severos problemas fiscales y en la balanza de pagos, la inflación galopante y el desplome de los salarios reales.

El comportamiento de Chávez es típico de tales experimentos económicos populistas. Los éxitos iniciales tienden a animar a los formuladores de políticas públicas, que cada vez están más seguros de que tuvieron razón al descartar las recomendaciones de la mayoría de los economistas. La formulación racional de políticas se convierte en algo crecientemente más difícil, a medida que los líderes se convencen de que las restricciones económicas convencionales no se aplican a ellos. Sólo se comienzan a tomar medidas correctivas cuando la economía se ha salido de control. Pero, para entonces, ya es demasiado tarde.

Mi experiencia al tratar con el gobierno de Chávez confirmó este patrón. En febrero de 2002, por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar largo y tendido con Chávez sobre el estado de la economía venezolana. En ese momento, la economía había entrado en una recesión como resultado de una expansión fiscal insostenible llevada a cabo durante los primeros 3 años del mandato de Chávez. Miembros moderados dentro del gobierno habían organizado la reunión con la esperanza de que ésta estimulara cambios en el manejo de las finanzas públicas. Tal como un colega y yo le explicamos a Chávez, no había forma de evitar la profundización de la crisis macroeconómica del país sin un esfuerzo creíble para elevar el ingreso y racionalizar los gastos. El Presidente escuchó con interés, tomando notas y haciendo preguntas durante tres horas de conversación, y terminó nuestra reunión con la petición de que habláramos con los ministros de su gabinete y programáramos futuras reuniones. Sin embargo, cuando procedimos a entrevistarnos con los funcionarios, la crisis económica se estaba extendiendo al terreno político, y la oposición convocaba a hacer manifestaciones en las calles en respuesta a la caída de la popularidad de Chávez, según las encuestas. Poco después, los trabajadores de la empresa petrolera estatal, PDVSA, se unieron a las protestas.

En el debate que siguió dentro del gobierno sobre cómo manejar la crisis política, los izquierdistas de la vieja guardia persuadieron a Chávez de adoptar una línea dura. Así, despidió a 17 000 trabajadores de PDVSA y marginó a los moderados que

había dentro de su gobierno. Cuando recibí una llamada en la que se me informaba que nuestras futuras reuniones con Chávez se habían cancelado, supe que los políticos de línea dura habían tomado la delantera. El manejo que hizo Chávez de la economía y de la crisis política tuvo costos significativos. Chávez usó hábilmente los errores de la oposición (convocar a una huelga nacional e intentar un golpe de Estado) para desviar la culpa de la recesión. Pero, de hecho, el PIB real se contrajo en 4.4% y la moneda había perdido más de 40% de su valor en el primer trimestre de 2002, antes del inicio de la primera huelga de PDVSA, el 9 de abril. Desde enero del mismo año, el Banco Central ya había perdido más de 7 000 millones de dólares en un intento inútil por defender la moneda. En otras palabras, la crisis económica había empezado mucho antes que la crisis política —un hecho que sería olvidado en las secuelas del tumulto político que siguió—.

La respuesta del gobierno a la crisis ha tenido más consecuencias para la economía venezolana. La toma de PDVSA por parte de los partidarios de Chávez y la subordinación de las decisiones de la empresa a los imperativos políticos del gobierno han resultado en una disminución drástica de la capacidad de producción petrolera de Venezuela. La producción ha estado disminuyendo de manera sostenida desde que el gobierno consolidó su control sobre la industria a finales de 2004. De acuerdo con estadísticas de la OPEP, Venezuela produce actualmente sólo tres cuartas partes de su cuota de 3.3 millones de barriles al día. El gobierno de Chávez, en consecuencia, no sólo ha desperdiciado el mayor auge petrolero en Venezuela desde los años setenta, sino que también mató a la gallina de los huevos de oro. A pesar del aumento en los precios del petróleo, PDVSA está cada vez más agotada por la combinación del aumento en los costos de producción, debido a la pérdida de capacidad técnica y a las demandas de una red de clientelismo político cada vez mayor, y por la necesidad de financiar numerosos proyectos para el resto de la región, que van desde la reconstrucción de refinerías cubanas hasta el suministro de combustible barato a alcaldías controladas por los sandinistas en Nicaragua. Como resultado, la capacidad que ofrecen las ganancias del petróleo para aligerar las restricciones fiscales del gobierno se está volviendo cada vez más limitada.

ARANDO EL MAR

SIMÓN BOLÍVAR, líder de la independencia de Venezuela y héroe de Chávez, dijo alguna vez que para evaluar las revoluciones y a los revolucionarios se necesita observarlos de cerca, pero juzgarlos a distancia. Ya que tuve la oportunidad de hacer ambas cosas con Chávez, he visto hasta qué punto ha fracasado al no cumplir con sus promesas ni con las expectativas de los venezolanos. Ahora, los votantes están haciendo el mismo descubrimiento, lo que terminará por conducir a la caída de Chávez. Las dificultades para asegurar una transición política pacífica se verán agravadas, ya que, en los últimos 9 años, Venezuela se ha vuelto una sociedad cada vez más violenta. Esta violencia no sólo se refleja en el enorme incremento en los

índices de criminalidad, sino que también afecta la forma como los venezolanos resuelven sus conflictos políticos. Si Chávez es responsable de esto o no, carece de importancia. Pero es vital que los venezolanos encuentren la manera de evitar que la crisis económica inminente encienda un conflicto político violento. A medida que la popularidad de Chávez comience a menguar, la oposición se sentirá cada vez más animada para llevar a cabo iniciativas para debilitar el movimiento chavista. El gobierno puede volverse cada vez más autoritario, en cuanto comience a entender los altísimos costos que pagará si pierde el poder. Por lo tanto, a menos que se cree un sistema por medio del cual el gobierno y la oposición puedan llegar a un acuerdo, hay un riesgo significativo de que uno de los dos lados recurra a la fuerza.

En retrospectiva, una pregunta persistente (en sí misma digna de un estudio potencialmente fascinante en materia de economía política internacional) será de qué manera el gobierno venezolano ha sido capaz de convencer a tantas personas del éxito de sus esfuerzos por combatir la pobreza, a pesar de la completa falta de evidencia real sobre su eficacia. Probablemente, cuando se escriba ese estudio, se descubrirá que la estrategia del gobierno de Chávez de cabildear activamente a los gobiernos extranjeros y de lanzar una campaña de relaciones públicas de alto perfil —encabezada por la Oficina de Información de Venezuela, con sede en Washington— ha desempeñado un papel vital. El generoso desembolso de préstamos a países caribeños y latinoamericanos carentes de efectivo, la venta de petróleo y gas para calefacción baratos para apoyar a aliados políticos en países desarrollados y en desarrollo, y el uso encubierto de contribuciones políticas para comprar la lealtad de políticos en países vecinos también forman parte, con toda seguridad, de la explicación.

Sin embargo, tal vez una razón aún más importante de este éxito sea la disposición que tienen los intelectuales y políticos en países desarrollados de creer una historia en la que los dilemas del desarrollo latinoamericano se explican por la explotación de las masas de pobres a manos de élites adineradas y privilegiadas. La historia de Chávez como un revolucionario social que, finalmente, está rectificando las injusticias generadas por siglos de opresión encaja muy bien en los estereotipos tradicionales de la región, lo que refuerza la visión de que el subdesarrollo latinoamericano se debe a los vicios de sus clases gobernantes depredadoras. Una vez que uno adopta este punto de vista, es fácil olvidarse de diseñar iniciativas que deriven en políticas públicas que podrían realmente ayudar al crecimiento latinoamericano, como terminar con los subsidios agrícolas que reducen los precios de las exportaciones de la región o aumentar de manera significativa la ayuda económica que se otorga a países que llevan a cabo esfuerzos serios por combatir la pobreza.

El periodista estadounidense Sydney Harris escribió una vez que “creemos lo que queremos creer, lo que nos gusta creer, lo que viene bien a nuestros prejuicios y aviva nuestras pasiones”. La idea de que los gobiernos latinoamericanos están controlados por élites económicas puede haber sido cierta en el siglo XIX, pero es totalmente inconsistente con la realidad en un momento en el que todos los países

latinoamericanos, excepto Cuba, tienen elecciones regulares con altos niveles de participación popular. Al igual que los gobiernos del resto del mundo, los gobiernos latinoamericanos tratan de equilibrar el deseo de una redistribución de la riqueza con la necesidad de generar incentivos para el crecimiento económico, las realidades del poder estatal efectivo limitado y las incertidumbres de la eficacia de iniciativas de políticas públicas específicas. Ignorar esas verdades no sólo es anacrónico y desacertado, sino que también impide el diseño de políticas exteriores sensatas, dirigidas a ayudar a los líderes de la región a formular y a instrumentar estrategias para alcanzar un desarrollo sostenible y equitativo.

Sería temerario afirmar que es obvio lo que Latinoamérica debe hacer para sacar a su población de la pobreza. Si hay una lección que pueda extraerse de las experiencias de otros países es que las estrategias de desarrollo exitosas son diversas y que lo que funciona en un lugar puede no funcionar en otro. No obstante, experiencias recientes en países como Brasil y México, donde programas hábilmente diseñados para llegar a los grupos más débiles de la sociedad han tenido un efecto significativo en su bienestar, muestran que las soluciones eficaces se encuentran al alcance de los formuladores de políticas públicas pragmáticos que están dispuestos a ponerlas en marcha. Es la tenacidad de esos actores realistas, más que la audacia de los idealistas, la que encarna la mayor promesa para aliviar las dificultades de los pobres de América Latina. 🌐